DECISIÓN No. 2020-GGE-
EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO
DEL ECUADOR B.P.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, forma parte de los primordiales del Estado: “Garantizar a sus habitantes el derecho (...) a la seguridad integral (...);”

Que, el artículo 14 de la mencionada Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

Que, el numeral 2 del artículo 16 de la Normativa Constitucional establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;

Que, el numeral 2 del Art. 17 del referido cuerpo constitucional determina que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto facilitará el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada;

Que, el artículo 33 de la misma Carta Magna consagra al trabajo como un: “un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.”;

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 ibídem determina que la Administración Pública “constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el numeral 6 del artículo 277 ibídem señala que para la consecución del Buen Vivir, será deber del Estado, la promoción e impulso de la tecnología;

Que, el numeral 6 del artículo 284 de la precitada Constitución determina que es deber del Estado impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales;
Que, de acuerdo al artículo 308 de la señalada Normativa Constitucional: "Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país.");

Que, el artículo 309 ibídem establece: "El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos de público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. (…)";

Que, el artículo 310 de la mencionada Ley Fundamental determina: "El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. (…)";

Que, el artículo 325 ibídem establece que el Estado garantiza el derecho al trabajo y reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas;

Que, el artículo 326 ibídem en su numeral 11 señala que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente;

Que, la mencionada Carta Magna del Estado Ecuatoriano en su artículo 389 instituye: "El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. / El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.");

Que, el artículo 413 ibídem dispone: "El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas. (…)".

Que, el artículo 160 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece: "El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario";

Que, así mismo, el artículo 365 del precitado Código Orgánico establece: "Las entidades del sector financiero público se constituirán como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades y servicios financieros se regirán por las disposiciones de este Código, las que emitan la Junta, los organismos de control, sus respectivos directores, las aplicables a las instituciones financieras y en lo demás, aplicarán la legislación que rige a las instituciones públicas."

Que, en el artículo 369 ibídem se indica que las entidades financieras públicas ejercerán actividades financieras de manera sustentable eficiente y equitativa;
Que, conforme al artículo 378 ibídem, son funciones del Gerente General: "1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad; (...) 4. Dirigir la gestión operativa y administrativa de la entidad; (...) 8. Las demás que le asigne la ley y el estatuto."

Que, en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), se señalan los derechos irrenunciables de las y los servidores públicos;

Que, el artículo 25 de la LOSEP regula las jornadas legales de trabajo pudiendo ser éstas Ordinaria y Especial;

Que, el artículo 51 de la LOSEP en su literal a) determina como una de las competencias del Ministerio del Trabajo, la de "expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta ley";

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo (COA), establece: "La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley."

Que, el tenor del artículo 68 del COA reza: "La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley."

Que, de conformidad con lo dispuesto en el del artículo 69 del COA, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, con la indicación de que esta delegación no supone cesión de la titularidad de la competencia;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 2015 (R.O.S. No. 676 de 25/01/2016 – última reforma: 16/06/2017), se ordenó la reorganización del Banco del Estado, cambiándose su denominación a Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;

Que, los artículos 2, 3 y 4 del Decreto ibídem establecen, respectivamente, lo siguiente: "Art. 2.- El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., es una entidad del sector financiero público, con personalidad jurídica propia, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades y en el desarrollo de servicios financieros se regirá por las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, este Decreto, las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los organismos de control, la Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y, en los demás, las normas de su Estatuto Social y las que rigen a las instituciones públicas."); "Art. 3.- El objeto del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., es financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, servicios públicos y de vivienda, sobre todo de interés social que contribuyan al desarrollo económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados."); y, "Art. 4.- El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., ejercerá actividades financieras y podrá realizar todas las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios determinadas en el artículo 154 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, de conformidad con la autorización que emita la Superintendencia de Bancos.


Que, el artículo 46 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., establece que el Gerente General será responsable de la gestión técnica, operativa, administrativa y financiera de la Entidad;

Que, dentro del actual Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., expedido y reformado por el Directorio Institucional, consta en el literal a. del numeral 6.11 de su artículo 6 la misión de la Gerencia General: "Planificar, dirigir y evaluar las actividades del negocio y la administración interna del Banco, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales."

Que, en el literal b. del referido numeral 6.11 del artículo 6 del Estatuto Orgánico ibídem, contempla -entre otras-, las siguientes atribuciones y responsabilidades del Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.: "(...) 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio del Banco; (...) 10. Dirigir, controlar y administrar las operaciones del negocio. (...) 11. Disponer la ejecución de estrategias que permitan el cumplimiento de metas propuestas. (...) 14. Delegar funciones a otras áreas administrativas en función de la normativa vigente. 15. Las demás atribuciones y deberes que determinen la Constitución, las Leyes y Reglamentos vigentes o Resoluciones del Directorio del Banco."

Que, la letra a. del numeral 10.1 del artículo 10 ("Procesos Desconcentrados") del Estatuto Orgánico ibídem, establece para cada Sucursal Zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., la misión: "Administrar los procesos desconcentrados relacionados con la (...) gestión administrativa, dentro de su jurisdicción, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos para su jurisdicción, con base a las directrices y políticas emitidas por la Matriz."

Que, con Resolución Nro. 2018-DIR-052, de 26 de septiembre de 2018, el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. resolvió nombrar al Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al brote de la enfermedad Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, debido a que esta enfermedad epidémica se encuentra extendiéndose por varios países del mundo;

Que, el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional ante los inminentes efectos provocados por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), a fin de garantizar el derecho a la salud de los habitantes;
Que, los Ministerios de Gobierno, y, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 001 de 12 de marzo de 2020, dispusieron la adopción de acciones y medidas de preventivas frente a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) para evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en el país.

Que, el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020 (vigente a partir de su suspensión sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial), expidió las Directrices para la APLICACIÓN DE TELETRABAJO EMERGENTE DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA, las cuales rigen para las instituciones del sector público así como para el sector privado.

Que, conforme al artículo 3 del Acuerdo Ministerial ibídem, la adopción del teletrabajo emergente tiene como fin garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos durante la emergencia sanitaria declarada, siendo potestad de la máxima autoridad de la respectiva institución pública la implementación de dicha modalidad laboral;

Que, el tenor del artículo 4 del referido Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 es el siguiente: “Art. 4.- De la implementación del teletrabajo emergente.- Es la prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de la cual la o el servidor público o la o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones en las que habitualmente desarrolla sus actividades laborales. / La implementación de teletrabajo emergente en relaciones contractuales existentes, modifica únicamente la manera en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni cambiar las condiciones esenciales de la relación laboral, por tanto no altera derechos y no constituye causal de terminación de la relación de trabajo. / Durante la emergencia sanitaria declarada, el teletrabajo emergente (...) para el sector público (...) se aplicará de la siguiente manera: a) La máxima autoridad institucional del sector público (...) autorizará prestar sus servicios desde fuera de las instalaciones habituales de trabajo precautelando la prestación y operatividad de servicios. b) Corresponde a la máxima autoridad institucional del sector público o al empleador del sector privado; o sus delegados, establecer directrices, controlar y monitorear las actividades que la o el teletrabajador emergente ejecute durante la emergencia sanitaria declarada. c) La o el teletrabajador emergente será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y/o equipos para el desarrollo del teletrabajo que le sean provistos. d) La o el teletrabajador emergente es responsable de la custodia y confidencialidad de la información, que será exclusivamente utilizada para la ejecución del trabajo. e) Para la implementación e inicio del teletrabajo emergente, solo será necesario el registro descrito en el siguiente artículo. / Los servidores públicos y trabajadores a los cuales la autoridad competente les disponga aislamiento como medida de prevención para evitar el contagio, se acogerá al teletrabajo emergente.”

Que, a su vez, el artículo 5 del citado Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 dispone: “Para el sector público la Unidad de Administración de Talento Humano Institucional deberá remitir al correo electrónico info@teletrabajo.gob.ec, el formulario de registro de teletrabajadores emergentes disponible en nuestra página web http://www.trabajo.gob.ec/registro-4/ (...) / Con la información remitida, el Ministerio de Trabajo realizará el registro de los servidores públicos y trabajadores que se acogieron a esta modalidad.”
Que, la Disposición General Tercera del Acuerdo Ministerial ibídem señala: "Observando las medidas sanitarias dispuestas por el ente rector de salud pública, durante la emergencia sanitaria declarada todas las instituciones del sector público deberán garantizar la provisión de los servicios públicos, la prestación de los servicios de salud y velar por la seguridad de la ciudadanía (...)."

Que, es necesaria la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus (COVID-19), como parte de las medidas institucionales inmediatas y oportunas para prevenir y proteger a las y los servidores, trabajadores y usuarios del Banco de Desarrollo del Ecuador;

Que, el Circular Nro. MDT-DSG-2020-0013-CIRCULAR, Quito, D.M. de 16 de marzo de 2020, cuyo asunto dice: CIRCULAR TELETRABAJO, la Abg. Deysi Cumandá Terán Eguez en su calidad de SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO, manifiesta que con el antecedente del Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020 y con el propósito de precautelar la salud de los servidores públicos, se pone en conocimiento entre otras cosas que la modalidad de teletrabajo emergente no es únicamente de exclusiva aplicación para grupos de atención prioritaria, sino para todos los servidores públicos que puedan acogerse a la misma.

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias citadas, y de lo establecido en el Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020;

**DECIDE:**

**Artículo 1.-** Autorizar la implementación de la modalidad del teletrabajo emergente en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., con estricta sujeción a las directrices contenidas en el Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076, expedido el 12 de marzo de 2020 por el Ministerio del Trabajo, mientras dure la declaración de emergencia sanitaria ocasionada por el brote de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

**Artículo 2.-** Delegar a la Subgerencia de Gestión Institucional, la emisión de directrices para la implementación del teletrabajo emergente en la Entidad, y las funciones de controlar y monitorear las actividades que las y los teletrabajadores emergentes de la Entidad deban cumplir y ejecutar durante la emergencia sanitaria declarada, en virtud de lo cual le corresponderá designar y/o autorizar al personal que por razones de prevención, salud o aislamiento deba realizar sus labores bajo dicha modalidad laboral, conforme lo previsto en el artículo 4 del precitado Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-376.

**Artículo 3.-** Encargar a la Dirección de Administración de Talento Humano gestionar el registro de las y los teletrabajadores emergentes del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en los términos previstos en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial ibídem.

**Artículo 4.-** Disponer a las Unidades responsables de la áreas de Talento Humano, Bienes y Servicios Generales, Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), Gestión Integral de Riesgos y Seguridad de la Información, así como a las Sucursales Zonales del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., gestionar de manera coordinada y oportuna la aplicación de la presente Decisión en lo que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, con observancia de las directrices contenidas en el referido Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020.
Artículo 5.- Las y los titulares de cada Unidad del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., tendrán el deber de asegurar, la debida y oportuna aplicación de lo dispuesto en esta Decisión, en las áreas a su cargo; para lo cual deberán comunicar a la Subgerencia de Gestión Institucional, en virtud de las atribuciones delegadas a dicha Unidad, los datos del personal a su cargo que sobre la base de un análisis de prevención y viabilidad operativa se considere pertinente que labore a través de la modalidad del teletrabajo emergente. Así mismo, las Unidades en mención realizarán el seguimiento de las actividades asignadas a dicho personal, asegurando el desarrollo de las actividades que garanticen la operatividad del giro de negocio del Banco de Desarrollo BP, en lo que la situación permita; además se informará a la Subgerencia de Gestión Institucional toda novedad que hubiere a lugar.

Artículo 6.- Todos los funcionarios, servidores y trabajadores del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., tendrán la obligación de colaborar para la cabal y eficaz ejecución de la presente Decisión, conforme las directrices y requerimientos que emita la Subgerencia de Gestión institucional en el ejercicio de la delegación descrita en el artículo 2 del presente instrumento.

Artículo 7.- Quienes adquieran la calidad de teletrabajadores emergentes en el marco de esta Decisión, serán responsables del cuidado y custodia de las herramientas y/o equipos que para el desarrollo del teletrabajo les sean provistos por la Entidad; así como de la custodia y confidencialidad de la información institucional, la misma que será exclusivamente utilizada para la ejecución de sus labores;

Artículo 8.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Artículo 9.- Disponer a la Secretaría General la inmediata notificación de esta Decisión a la Superintendencia de Bancos, a los miembros del Directorio Institucional y de la Junta de Accionistas; y, a los titulares de todas las Unidades y Sucursales Zonales del Banco, quienes a su vez deberán participarla inmediatamente al personal a su cargo;

Artículo 10.- Encargar a la Secretaría General la publicación de esta Decisión en la página web institucional.

COMUNÍQUESE.- Expedida en Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo de dos mil veinte.

Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla
GERENTE GENERAL
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
Expiidió y firmó la Decisión que antecede el Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 16 de marzo de 2020.

LO CERTIFICO:

Ab/ Esp. Jasmin Moyano Lucio
SECRETARIA GENERAL
DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.